

CATALUÑA

La propuesta de presupuestos dedica menos de un euro por anciano

EL PAÍS, Barcelona

Los sindicatos CC OO y UGT, además de otras seis asociaciones patronales, denunciaron ayer en un comunicado conjunto que la propuesta de presupuestos de la Generalitat para este año 2020 prevé dedicar menos de un euro al día por persona mayor en residencia asistida. Estos agentes sociales y económicos expresaron su "total disconformidad" con la propuesta de financiación destinada al sector de atención a la dependencia y discapacidad, que aumenta en 90 millones de euros para los próximos cuatro años.

Los presupuestos contemplan un incremento de unos 3.000 millones de euros respecto a las últimas cuentas aprobadas en 2017, de los cuales un máximo de 15 millones se podrían destinar a la atención a las personas mayores. Esto "significa dedicar menos de un euro al día por persona en residencia asistida, el recurso mayoritario entre las personas mayores en situación de dependencia", se afirma en el comunicado.

Las asociaciones también expresaron su "sorpresa y gran decepción" al ver cómo se ha pasado de una propuesta inicial de 300 millones en la hoja de ruta de los agentes sociales a una propuesta de presupuesto del Govern de un máximo de 90 millones para los próximos cuatro años. Por ello, piden al Govern y a En Comú Podem que rectifiquen la propuesta presentada y que retomen la de los 300 millones.

El comunicado denuncia la "infranunciación y el olvido" de las Administraciones sobre el sector social, y reivindica tres grandes objetivos para afrontar en una "sociedad envejecida": garantizar la calidad y la equidad en la atención a las personas mayores mejorar las condiciones laborales de los profesionales y garantizar la sostenibilidad de las empresas y las entidades".

Acuerdo inédito

El Govern pretende tener los presupuestos en vigor en abril, y su aprobación acabaría con tres años de cuentas prorrogadas gracias a una nueva mayoría parlamentaria hasta ahora desconocida, la que suman los actuales socios de Govern, los independentistas de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, con Catalunya en Comú.

Si se aprueban las Cuentas, la Generalitat dispondrá este año de 3.070 millones de euros más para repartir entre sus diferentes departamentos.



Incendio en la petroquímica de Tarragona, el pasado 14 de enero. / JOSEP LLUIS SELLART

Los alcaldes piden más controles en la petroquímica

MARC ROVIRA, Tarragona

La explosión, hace dos semanas, del reactor de óxido de etileno de la empresa Iqoxe, en La Canonja (Tarragona) marcó un antes y un después en la relación que los municipios de su alrededor mantienen con el complejo petroquímico. A las preocupaciones por la segu-

ridad en el polígono se suma el debate sobre el control de las emisiones de las fábricas, que solía ser un terreno casi exclusivo de los colectivos ecologistas. Ayer, más de veinte alcaldes de Tarragona se unieron para reclamar a la Generalitat cambiar los protocolos de seguridad en casos de emergencias químicas.

Nunca fue tan visible como ahora la sensación de intranquilidad que airean vecinos, trabajadores, ayuntamientos y representantes institucionales cercanos al mayor enclave químico del sur de Europa. La investigación que dirige el juzgado de Tarragona, bajo estricto secreto de sumario, deberá aclarar qué falló en la explosión de Iqoxe. La Fiscalía tramita la instrucción a través de su área de inspección de riesgos laborales, y no de medio ambiente, lo que focaliza las pesquisas en una presunta irregularidad de las condiciones de trabajo. La Generalitat también ha abierto expediente para investigar lo sucedido y otro para dirimir si la empresa reinició su actividad tras la explosión sin tener los permisos en regla. Se suman a cuatro sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo en los últimos años por cuestiones de seguridad laboral y de salud, según reveló tras la explosión el consejero de Trabajo, Chakir El Homrani.

Más allá de la evolución judicial y administrativa del caso, el territorio ha activado el altavoz para reivindicar sus demandas. Ayuntamientos, sindicatos y vecinos reclaman aumentar las medidas de seguridad en la treintena de plantas químicas que operan en el triángulo comprendido entre Tarragona, La Canonja y Vila-seca.

La reunión de ayer entre una veintena de alcaldes de la zona sirvió para hacer frente común en sus exigencias a la Generalitat: durante el encuentro, cele-

brado en el edificio del Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (Cecat), situado a apenas cuatro kilómetros de distancia de la factoría de Iqoxe, los alcaldes interpellaron al viceconsejero de la Presidencia, Pau Villoria, y le insistieron en que la gestión de las crisis se asuma directamente desde Tarragona, en lugar de coordinarse desde Barcelona, como se viene haciendo desde 2007. Los alcaldes se hicieron eco de la manifestación de

unas 3.000 personas que recorrió las calles de Tarragona el día después de la explosión. Los vecinos pidieron entonces acabar con la "impunidad" de la industria química, y los representantes municipales exigieron ayer que se actualicen los mecanismos de reacción ante un accidente químico. A su vez, sostuvieron la conveniencia de dar "mejor formación a la ciudadanía" y una mayor transparencia de las informaciones relacionadas con el sector, explicó Pau Ricomà, alcalde de Tarragona. "La química tiene que ser la primera interesada en tener el máximo nivel de seguridad", abundó. A estas reclamaciones se sumó la presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauredó. "Por primera vez ha habido afectación fuera del polo petroquímico", recordó en alusión al vecino del barrio de Torreforta que murió en su casa a dos kilómetros de distancia de la planta siniestrada, tras un derrumbe provocado por un proyectil que salió disparado del reactor.

"Que no sea de nuestra competencia, no significa que no sea de nuestra incumbencia", dijo Llauredó en un encuentro con la prensa, donde fue un paso más allá y abrió la puerta a impulsar un debate social sobre cuál debe ser el futuro de la industria en Tarragona: "Tenemos que avanzar hacia una química más verde, más segura y sostenible, que sea capaz de convivir con los ciudadanos y con otros sectores económicos, como el turismo", dijo.

La huelga tensa la relación con la empresa

La convocatoria de una huelga en el complejo petroquímico de Tarragona (primero impulsada por CC OO y luego secundada por UGT) ha abierto un nuevo frente a las empresas del polígono, especialmente a Iqoxe. A la huelga, convocada para el mes de febrero sin fecha determinada todavía, están convocados los trabajadores y "la sociedad civil" para protestar contra las empresas del polígono y contra la gestión del desastre por parte de las administraciones. Iqoxe, mientras tanto, tiene una de sus plantas inutilizadas por la explosión y trabaja para reiniciar su actividad próximamente. / J. CATÀ

El juez pide más datos para imputar a cargos de Convergència en el 'caso 3'

J. J. GÁLVEZ, Madrid

A José de la Mata, juez de instrucción de la Audiencia Nacional, no le bastan por ahora los datos facilitados por la Fiscalía Anticorrupción para imputar a 12 ex altos cargos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en el llamado caso 3%. Según consta en una resolución dictada ayer, el magistrado solicita al ministerio público que "amplie las razones por las que considera que las personas que relaciona en su escrito" —entre otros, los exconsejeros Felip Puig, Jordi Jané, Pere Macias e Irene Rigau— "pudieran estar implicadas en un delito de blanqueo de capitales".

El instructor, además, insiste a Anticorrupción que explique si, "en particular", la implicación de los convergentes se encuentra relacionada con alguna actuación "a través de la cual el partido ingresa y justifica fondos de origen desconocido al amparo de donaciones realizadas por particulares". Esta decisión de De la Mata se produce apenas unos días después de que la Fiscalía también pidiese la imputación del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, por viajar gratis a la final de la Champions de 2015 con su hija, a cuenta de uno de los empresarios investigados en el caso, Jordi Soler. Una solicitud a la que aún no ha dado respuesta, aunque sí ha decidido llamar a declarar a Soler.

Contabilidad paralela

Tras varios informes de la Guardia Civil, donde se considera acreditada la "contabilidad paralela" de Convergència, Fiscalía ha solicitado ahora por escrito al juez que investigue a quienes, en su opinión, podrían encontrarse detrás de esas donaciones irregulares encubiertas entre 2008 y 2015. Según avanzó ayer El Periódico, el ministerio público señala en primer lugar a cuatro exconsejeros de Jordi Pujol y Artur Mas: Felip Puig; Pere Macias; Jordi Jané; e Irene Rigau.

Pero Anticorrupción también apunta a otros ocho exdirigentes de la formación soberanista: Carles Flamerich, Marc Guerrero, Jordi Moltó, Gloria Renom, Montserrat Candín, Víctor Vila, Eduard Freixedes; y Xavier Crespo. Los 12 efectuaron donaciones al partido por importes que oscilan de los 1.500 a los 3.000 euros, según las pesquisas de Guardia Civil.

Los investigadores sospechan que CDC usaba el dinero recaudado por sus fundaciones, acatdem y Forum Barcelona. La Guardia Civil alertaba en su informe sobre la coincidencia de donaciones en periodos muy concretos.